

Policy Brief

Fecha: 13 de Diciembre, 2019

Desigualdad y violencia en Centroamérica

por Marlin Sierra

Contexto

En la última década, Centroamérica ha sido caracterizada como una de las regiones con mayor índice de violencia en el mundo. El promedio del Índice de Paz Global coloca a Centroamérica por arriba de la media mundial (posición 91,6 respecto a la lista de los 163 países), siendo Honduras el peor calificado (123), seguido de Nicaragua (120). Ambos países enfrentan una crisis socio política donde la policía y el Ejército, así como civiles armados generan un alto grado de convulsión y violencia.

Uno de los riesgos más relevantes es, como demuestra la situación de Nicaragua y en alguna medida, la de Honduras, la destrucción del Estado de Derecho y la instauración de gobiernos autoritarios. Presidentes electos democráticamente intentan perpetuarse en el poder, ejercen un control absoluto sobre los poderes públicos en alianzas con sectores económicos, restringen la libertad de prensa y violan libertades fundamentales, tienen un total desprecio por el derecho internacional, tratando de eliminar de forma progresiva el Sistema democrático y el Estado de Derecho, atentando contra la estabilidad y la paz social en la región.

La presencia del crimen organizado ha sido uno de los factores fundamentales en el deterioro de la seguridad y la justicia de la región. En el 2018, El Salvador registró una tasa de homicidio de 51 por cada 100,000 habitantes, Honduras 40, Guatemala 22, con una mínima reducción con respecto al año anterior. En el caso de Nicaragua, pese que el dato oficial mantiene la tasa de 7 por cada cien mil, éste es mayor tomando en cuenta las 328 personas asesinadas en el contexto de las protestas de 2018, producto de la represión y violencia estatal. Otra preocupación son las altas tasas de feminicidios y la violencia hacia las mujeres. De acuerdo a datos oficiales de enero 2018 a agosto 2019, más de 2118

mujeres fueron asesinadas, siendo Guatemala el país que registra mayor número de feminicidios (966), seguido de Honduras con 481. En el caso de Costa Rica los abusos sexuales no sólo han crecido en número, cada vez representan una porción mayor de todos los delitos cometidos en el país, sólo en 2018, cifras oficiales reportan 3,734.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Nicaragua es el país más señalado de corrupto, seguido de Guatemala, Honduras, El Salvador. Los esfuerzos realizados por la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra redes de corrupción política que incluye a algunos miembros del Congreso y ex ministros, por malversación de fondos públicos, fraude y lavado de activos por apoyar campañas de diferentes partidos políticos en el contexto de las elecciones, enfrentan una resistencia significativa por parte de los poderes políticos y económicos, quienes hacen todo lo posible por frenar las investigaciones como parte de un “pacto de impunidad” en los más altos niveles institucionales.

La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos ante la existencia de una “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte, actúa favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial.

La violencia se expresa en la intimidación, la ame-

naza y el abuso de autoridad, siendo cada vez mayor la brecha entre las leyes y la realidad cuya tendencia es el establecimiento de Estados desestructurados, anárquicos, sin ley y sin gobierno. El periodismo se enfrenta a la persecución política, la cual se expresa en agresiones, amenazas, obstáculos para acceder a información pública y otras represalias incluida la cancelación de licencias para transmitir en el caso de canales de televisión así como a obstáculos aduaneros para obligarles al cierre, tal es el caso de Nicaragua, donde casi un centenar de periodistas han debido salir al exilio para proteger la vida e integridad personal

La criminalización de la protesta social, los asesinatos, ataques, amenazas, hostigamiento y las campañas de desprestigio contra personas defensoras de los derechos humanos, así como el cierre de espacios de la sociedad civil son también parte de las estrategias y políticas gubernamentales que tienen como fin silenciar a quienes denuncian las graves violaciones a los derechos humanos y la corrupción, convirtiendo la región en una de las más inseguras para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos, hecho que ha provocado una nueva ola de desplazamiento a gran escala, principalmente para defensores de Honduras y Nicaragua. Cabe destacar que la crisis sociopolítica de Nicaragua tuvo un impacto significativo en la actividad económica del país (-4,1%) y afectó la economía de Costa Rica, Honduras y Panamá, los cuales experimentaron una desaceleración.

Las amenazas económicas de Estados Unidos a los países de Centroamérica, no han logrado frenar la ola migratoria. Tampoco lo han hecho las medidas represivas que han impulsado los gobiernos, quienes han optado por militarizar las fronteras para cerrar el paso. ACNUR, reporta que más de 470.000 centroamericanos han sido desarraigados de sus hogares. En todo el mundo, hay actualmente alrededor de 387.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala - una cifra que creció en una tasa anual del 24 por ciento. En el caso de Nicaragua, a raíz de la agudización de la crisis socio-política (abril 2018) miles de personas a salido del país huyendo de la violencia y la represión, la mayoría hacia Costa Rica. Según fuentes oficiales más de 88.000 nicaragüenses han llegado a Costa Rica en menos de 18 meses, de ellos solo 26 mil han podido realizar sus gestiones pero la gran mayoría no cuentan con un trabajo que les permita procurarse su sustento y el de sus familias. En general, Los países y comunidades de acogida en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá han estado haciendo todo lo posible para recibir a esta población en su tránsito hacia Estados Unidos pero adolecen de recursos económicos y humanos para atender la demanda, la cual está sobrepasando la capacidad de las comunidades de acogida, lo que limita los servicios, ya sobrecargados, que también sirven a la población local.

Recomendaciones

- Promover reformas estructurales para garantizar un sistema de justicia independiente y efectivo, capaz de atender y sostener los esfuerzos contra la impunidad y la corrupción de la sociedad civil.
- Empezar acciones que fortalezcan la institucionalidad democrática para contar con instituciones representativas, legítimas y eficaces y actores comprometidos con las mismas. Por ejemplo: crear condiciones para que futuros procesos electorales sean transparentes propiciando elecciones en las que la voluntad del electorado sea respetada, entre otras, prohibir la reelección.
- Fortalecer a la MMICH en Honduras, la CICIG en Guatemala y demandar el retorno de la CIDH, OACNUDH en Nicaragua, así como las Procuradurías de DDHH demandando a los Estados cumplir con sus compromisos internacionales de garantizar y apoyar su labor.
- Demandar procesos de rendición de cuentas exhaustivos y transparentes a fin de asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos en la región puedan acceder a la justicia, verdad y reparación.
- Demandar la implementación de políticas públicas de prevención para protección de los/as defensores/es de DH y exigir el cese a la represión.
- Atender las necesidades básicas de las personas migrantes y desplazadas internas y realizar gestiones para que los Estados mejoren el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a ellas.
- Reforzar los mecanismos regionales de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto migratorio.
- Incidir para que los Estados implementen políticas migratorias más humanas y respetuosas con de los derechos humanos de los migrantes en el marco de la negociación y la adopción del Pacto Global para la Migración, que busca crear condiciones para una migración más segura.

¹Centroamérica, integrada por siete países incluyendo Belice y Panamá, cuenta con una superficie de 523.000 km² y 42,5 millones de habitantes aproximadamente.

²Observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/wp-content/uploads/2019/05/Cuadros-Entrada-Neta-MP_-2018.xlsx

³https://transparenciay.org/files/content/pages/CPI_2018_Ejecutive_summary_web_Es.pdf

⁴Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides)